

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA  
Bogotá D. C., 01 septiembre de dos mil veinte (2020)

Medida de Protección No. 207-2018

Radicado 2020-0296

A continuación, procede el despacho a desatar el recurso de apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, en concordancia con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, previo las siguientes,

**ANTECEDENTES**

El señor DIEGO FERNANDO VARGAS DEVIA acudió a la Comisaría Séptima de Familia Bosa II de esta ciudad, poniendo en conocimiento los hechos de maltrato físico del que es víctima su hijo, parte de su progenitora la señora DANI MILDREY PADILLA BARBOSA.

Instruidas las diligencias, mediante providencia de fecha 24 de marzo de 2020, la Comisaria de conocimiento ordenó medida de protección a favor del menor J.S.V.P. contra DANI MILDREY PADILLA BARBOSA.

Frente a la anterior decisión la accionada interpuso recurso de apelación manifestando: *“No estoy de acuerdo porque el señor aquí presente fuma marihuana y más que esta bien con la abuela, les entregue mi hijo gordo y ahora lo tienen flaco, ella no fue mamá para Diego y si va a ser abuela para mi hijo, no creo”*

Concedida la apelación, corresponde a este estrado judicial decidir lo pertinente.

**CONSIDERACIONES**

El artículo 4º de la ley 294 1.996, modificado por el artículo 1º de la ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...”*.

El artículo 18 *Ibídem* prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

Sea lo primero mencionar que el fundamento del recurso de apelación interpuesto por la accionante, lo es porque considera que la decisión no es acertada.

Los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: *“golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte”*, y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *“actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia”*<sup>11</sup>; los cuales, entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional.

Igualmente, el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar.

Descendiendo al caso tenemos que el denunciante sostiene que su hijo ha sido objeto de maltrato físico por parte de la progenitora señora DANI MILDREY PADILLA BARBOSA.

Sea lo primero decir que la argumentación desplegada en el asunto materia del presente pronunciamiento frente al maltrato del que fue víctima el menor por parte de su progenitora, se compadece con la realidad probatoria que registra el expediente, pues no solamente está la declaración del querellante y la querellada, sino además el informe de medicina legal que certifico una incapacidad médico-legal de 8 días por las lesiones encontradas, así como el relato del menor ante el médico, donde refirió ***“mi mama me pego puños en la espalda , eso fue hace poquito, otro día me pego en las piernas, también me clava las uñas”***, concluyendo además un maltrato infantil crónico debido a que las lesiones encontradas tienen diferente tiempo de evolución.

El artículo 26 del Código de Infancia y Adolescencia señala que *“en toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta”*.

Frente a este tema la Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho de los niños y niñas a ser escuchados en el marco de cualquier acción judicial o administrativa. En sentencia T-844 de 2011, reiterada en la sentencia T-276 de 2012 indicó:

*“Siguiendo las recomendaciones que emitió el Comité sobre los Derechos del Niño acerca de esta importante garantía, **la Corte considera relevante señalar que la opinión del menor de dieciocho años debe siempre tenerse en cuenta** en donde la razonabilidad o no de su dicho, dependerá **de la madurez con que exprese sus juicios acerca de los hechos que los afectan, razón por la que en cada caso se impone su análisis independientemente de la edad del niño, niña o adolescente.***

*“Se ha indicado que la madurez y la autonomía de este grupo de especial protección no están asociadas a la edad, sino a su entorno familiar, social, cultural en el que se han desenvuelto. En este contexto, la opinión del niño, niña y adolescente siempre debe tenerse en cuenta, y su **“madurez”** debe*

*analizarse para cada caso concreto, es decir, a partir de la capacidad que demuestre el niño, niña o adolescente involucrado para entender lo que está sucediendo". (resaltado del texto).*

Puestas así las cosas para el despacho es claro sin lugar a dudas existió agresión física proferida por la señora DANI MILDREY PADILLA BARBOSA hacia su hijo, lo que permite a éste despacho considerar asertivo lo dispuesto por la comisaria de conocimiento en la decisión que fuera objeto de recurso, más cuando el solo hecho de proporcionar maltrato constituye ya una desproporción respecto de la forma de solucionar conflictos.

Con base en lo expuesto, el Juzgado concluye que debe confirmar en todas sus partes la resolución de fecha 18 de octubre del pasado año, proferida por la Comisaría Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Confirmar la providencia del 24 de marzo de 2020, proferida por la Comisaría Séptima de Familia Bosa II de esta ciudad.

**SEGUNDO:** Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito.

**TERCERO:** Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen previa anotación de los libros radicadores.

NOTIFÍQUESE,

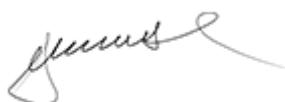
A large, bold, handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes and a final flourish.

**CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ**

**JUEZ**

ESTADO 58

02-09-2020

A smaller, more fluid handwritten signature in black ink, with a distinct loop and a trailing stroke.

**TOMAS OLAYA GONZALEZ**

srio

<sup>[1]</sup> [www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia\\_intrafamiliar.html](http://www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html)